

UNA SALIDA A LA CRISIS CHILENA

En el año que se inicia se cumplirá un decenio desde que las Fuerzas Armadas tomaron a su cargo el poder político de la Nación. El suyo ha sido el gobierno más largo de la historia de este siglo y el que ha contado con recursos de poder más amplios, de todos los que ha tenido Chile. Ellos han sido usados discrecionalmente en un marco de violación sistemática de los derechos humanos. Diez años bajo estas condiciones parecen un plazo racional y prudente para apreciar con inteligencia los resultados de su política, y la herencia que dejará a las generaciones venideras.

Gobiernos anteriores, en plazos mucho más cortos, con atribuciones mucho más restringidas y dentro del Estado de Derecho, legaron al país importantes realizaciones en el desarrollo de la infraestructura, las comunicaciones, la energía, la industria, la educación, la vivienda y los beneficios sociales para las clases más postergadas. Más allá de sus diversas ideologías y de los reparos que cada uno de ellos puede merecer, el país acrecentó con su obra realizadora el capital social con que contaba; las nuevas generaciones se encontraron así con una mayor y mejor base material para desarrollar su vida y canalizar su impulso creativo.

La obra de este gobierno, que

tanto ha criticado a los anteriores, ha sido en cambio tristemente escasa en realizaciones: ninguna obra de envergadura ha venido a acrecentar el capital conjunto de la Nación. Por el contrario, hemos visto destruirse en estos años la industria nacional, los caminos, puertos, vías férreas; y con respecto a la población, caer los niveles de educación, aumentar y agravarse las desigualdades sociales, incrementarse por todas partes los contingentes de población desocupada buscando sobrevivir de cualquier forma.

LOS RESULTADOS ECONOMICOS

Aunque el diagnóstico económico es conocido, es necesario recordar algunos de sus rasgos principales. Estos últimos 9 años han sido el período de más bajo crecimiento promedio de la producción desde que existen cifras al respecto. Los sectores populares han sido más afectados que otros por este fenómeno.

La clase trabajadora ha soportado las más altas cifras de cesantía que registra nuestra historia: desde un 20 por ciento en 1975 hasta un 25 por ciento en 1982, llegando el proclamado "milagro" a rebajarla solo a un 14 por ciento en 1980. En los

años de mayor éxito del modelo económico, la desocupación era más alta que en el peor de los momentos económicos del período democrático.

La magra recuperación económica de la crisis de 1975 llevó a un crecimiento deformado: sólo se expandieron los sectores financieros y de servicios, mientras declinaban los sectores productivos. Así, entre 1974 y 1979, la producción de bienes por habitante —en pleno "milagro"— bajó en 2,5 por ciento. Esto explica la caída de la ocupación y la generación de un empleo precario (vendedores ambulantes, servicio doméstico, etc.) que ha venido alcanzando proporciones extraordinarias.

A la caída del empleo se une además la caída en los salarios, que en estos años nunca han logrado recuperar el nivel alcanzado a comienzos de la década del 70. Estos dos hechos explican por qué entre 1969 y 1978 (años para los que existe información comprobada) el 60 por ciento más pobre de la población redujo su participación en el consumo total del 36 al 28 por ciento, en tanto que el quinto de más altos ingresos lo aumentó de 43 a 51 por ciento. En 1978 el 20 por ciento de los hogares más pobres consumía un cuarto menos de productos básicos (harina, carnes,

aceite, leche, vegetales, azúcar, combustible y transporte) que en 1969. Así, los más pobres satisfacen en menor medida sus necesidades esenciales, a la vez que los más ricos disfrutan del acceso a bienes sofisticados, con la deuda externa que han contraído algunos grupos privados, pero cuyo pago en definitiva afecta los niveles de vida de todo el país.

Es claro entonces que aún en la época del "milagro económico" los sectores populares no estaban participando de sus ventajas. Se ha sostenido que un paliativo importante ha sido el gasto social, el cual habría permitido un mejoramiento relativo en el nivel de vida de los sectores más postergados. Esto no es efectivo, pese a lo mucho que se ha alardeado: los gastos del Estado en salud, educación, seguridad social, vivienda y urbanismo por habitante son hoy un diez por ciento inferiores al monto que se destinaba a ellos a fines de los años sesenta.

Se suma a lo anterior una industria nacional que ha sido prácticamente desmantelada, con un número de quiebras en aumento que supera ya todos los niveles conocidos en los últimos veinte años. La agricultura, por su parte, se sume en una crisis profunda, después de haber mostrado sus límites el propósito de reorientarla según la teoría de las "ventajas comparativas". El sistema financiero privado-hijo predilecto-del "modelo" se ha desmoronado espectacularmente en el último año, sosteniéndose exclusivamente gracias al apoyo del Estado, que en los últimos días se ha traducido en la liquida-

ción e intervención directa de los más importantes bancos del país.

A su vez, el nivel de endeudamiento ha llegado a ser el más alto per cápita del mundo. El pago de intereses y amortizaciones en lo inmediato, simplemente supera las posibilidades del país; será una carga que pesará arduamente sobre el futuro de Chile. Y, como se dijo, los créditos externos, en vez de dirigirse a la inversión productiva —que bajo este régimen jamás ha llegado siquiera a los niveles insatisfactorios del pasado—, se ha destinado a la especulación y al consumo escandaloso de los grupos más ricos. En fin, las propias reservas del país languidecen como resultado de la irresponsabilidad que ha imperado en la conducción económica.

Nada de esto, por supuesto, ha favorecido la Seguridad Nacional del país. Afirmar lo contrario es sólo un juego de palabras. No es más seguro un país cuya capacidad de producir bienes y alimentos para su propia población ha sido prácticamente destruída; cuyo endeudamiento hace que sus propias políticas internas sean fijadas desde el exterior —como ocurre ahora con el convenio con el Fondo Monetario Internacional—; que debe condicionar su desarrollo a pagar una deuda externa monstruosa, careciendo incluso de reservas para hacer frente a sus compromisos; para que decir frente a situaciones críticas de otra índole.

LOS RESULTADOS SOCIALES

Los indicadores sociales y culturales de este decenio muestran también una evolución claramente regresiva.

La cobertura del sistema de educación formal ha disminuído tanto términos absolutos como relativos respecto del año 1973. En la cúspide de la pirámide educativa la situación es todavía más grave: hoy día las universidades del país se hayan intervenidas militarmente; atienden a 30.000 jóvenes menos que en 1973, pese a que la población entre 20 y 24 años se ha incrementado desde entonces en 270.000 personas. El sistema paralelo (institutos profesionales, universidades privadas, academias superiores y centros de adiestramiento) constituyen un nuevo ámbito educativo profundamente desigual, inorgánico, y descoordinado. No debe extrañar, por lo tanto, que este sector, que se proclamó como una alternativa más eficiente que la universidad, sólo haya contribuído a incrementar la desocupación "ilustrada" Todo ello implica una desvalorización del potencial humano de la Nación y una dilapidación de los recursos que el país dispone para formar a las nuevas generaciones.

La actividad cultural del país ha decaído ostensiblemente. La edición de libros en Chile es hoy 60 por ciento menor que al comienzo de la década, mientras que la importación de libros y revistas se ha reducido a la tercera parte. Un gran número de escritores, artistas, científicos e in-

telectuales, sufre el exilio o ve dificultada su labor por obra de la censura y la postergación económica. Mientras otras naciones incentivan el desarrollo de la creatividad en los planos de la tecnología, la ciencia y el arte, nuestro país se ha venido quedando atrás, después de haber llegado a ser uno de los más importantes centros de irradiación cultural en Latinoamérica. La miopía frente a la importancia de este campo habrá de ser pagada cara en el futuro, con el drenaje cada vez mayor de inteligencia, el crecimiento de la dependencia del exterior en todos los planos, y el debilitamiento de nuestra conciencia de identidad nacional.

Otros derechos básicos de la población se han visto también cercenados. El derecho a una vivienda digna es uno de ellos: hacia mediados de 1982, el déficit habitacional neto en el país alcanzaba la suma de 710.000 viviendas; este déficit era 30 por ciento mayor que en 1973, y se incrementaba en más de 150.000 viviendas faltantes por año. Esto significa que aproximadamente el 32 por ciento de la población carecía a esa fecha de una vivienda propia, y que una importante proporción de estas familias debían vivir como allegados en casas de parientes y amigos. El drama del hacinamiento en las poblaciones se sigue agravando día a día, mientras que las nuevas construcciones sólo alcanzaron a una proporción reducidísima de los sectores medios y altos. El porcentaje del gasto fiscal en vivienda entre 1974 y 1982 no ha alcanzado a ser, en promedio, ni la mitad del gasto promedio

que en este rubro realizó el Estado entre 1965 y 1973.

En el plano de la salud pública la esperanza de vida al nacer ha continuado aumentando en estos años, lo que confirma una tendencia que ya se venía produciendo desde décadas pasadas. Lo mismo sucede con la mortalidad infantil. Al igual que en el caso de la nutrición, estos logros —aunque distan todavía de ser satisfactorios— han sido alcanzados con el esfuerzo de varias generaciones, y se mantienen en gran medida gracias a que el país ha logrado salvar el sistema de salud pública de la obra devastadora de las ideas dogmáticas de la economía de mercado. Aún así, la reaparición de algunas enfermedades infecto-contagiosas, que en el pasado habrían sido erradicadas, pone una luz de alarma en este terreno.

EL PAIS DESTRUIDO

El fracado del régimen militar en los diversos ámbitos de su gestión hay que ponerlo en su contexto político y moral, porque sus magros resultados han sido acompañados además por costos humanos y políticos que resultan inaceptables para cualquier conciencia civilizada.

Son diez años lo que se cumplirán de represión severísima de las voces disidentes y opositoras, lo que se ha expresado en muertes, detenidos-desaparecidos, cárcel, relegación y exilio. Durante este tiempo se ha mantenido además una censura persistente de las publicaciones y de la producción cultural de los chilenos.

La actividad política ha sido perseguida con Estados de Emergencia que se renuevan reiterada e injustificadamente, como fórmula habitual de gobierno. Todo esto ha significado además la desarticulación de las múltiples organizaciones autónomas de la base social, características de la sociedad chilena.

En fin, el régimen militar ha destruido una institucionalidad que garantizaba, al menos, un sistema de convivencia elemental entre los chilenos, y ha dado lugar a profundos procesos de descomposición moral y corrupción. Bajo este gobierno, por otra parte, se ha practicado una política beligerante frente a la comunidad internacional, rompiendo los lazos de respeto, comprensión y solidaridad que el país logró construir en el pasado.

La vulnerabilidad externa, la destrucción de la estructura productiva, la degradación de los recursos humanos de que dispone el país, y la ruptura de las bases de convivencia, configuran un cuadro donde la existencia y seguridad de Chile como Nación se ve seriamente amenazada.

LA CRISIS ACTUAL

Este sombrío cuadro que presenta Chile se ha agrabado por la crisis económica de los últimos años.

La crisis internacional se presenta como la excusa para el mayor fracaso económico que el país recuerde. Existe una crisis internacional profunda, pero es la política económica chilena, sus garrafales errores, y su dog-

matismo, lo que explica hasta donde hemos llegado: en tanto América Latina cae en un uno por ciento en su producto en 1982, Chile lo hace en un 15 por ciento; en tanto la cesantía en la región bordea el diez por ciento, la chilena trepa al 30 por ciento (con el PEM), y así con la caída de reservas y el nivel de endeudamiento. En vez de aprovechar una coyuntura externa de fácil acceso al crédito para incrementar la inversión, Chile —como en los tiempos del salitre— dilapidó estos recursos por una miope política doctrinaria impuesta desde el gobierno y la banca.

Sin crisis externa también estaríamos en una crisis económica: ésta sólo ha agravado al enfermo. Prueba de ello es que las cifras del diagnóstico presentado son previas a la crisis. Si se agrega el año 1982 el cuadro aparece aún más dramático.

Las acciones del gobierno frente a esta situación carecen totalmente de rumbo. Nada resuelven las medidas contradictorias, el recurso desesperado a la intervención del Estado y los cambios ministeriales. El fracaso del modelo exige un cambio total. Este debe ser *económico y político*.

Desde luego es absolutamente impostergable una profunda reorientación económica. Ello se hace tanto más evidente si se considera que el gobierno ha optado precisamente por mantener deprimida la actividad económica en nombre de los equilibrios externos y de los peligros de inflación, agravando con ello la postración de los sectores productivos, la creciente desarticulación de la capacidad productiva existente, el peligro del colapso del sistema financiero y la cre-

ciente pobreza de la mayoría.

Plantearse con energía la renegociación de la aplastante carga del servicio de la deuda externa, perfectamente viable en el contexto internacional actual, permitiría contribuir a redinamizar la actividad económica, impulsada a su vez por una activa política fiscal, orientada a expandir la demanda interna y a permitir la generación de empleo. En suma, se trataría de utilizar con urgencia los instrumentos propios de una regulación macroeconómica que se aleje de la ficción de los ajustes automáticos de mercado. Hay que reactivar con urgencia, y ello debe hacerse redistribuyendo los ingresos y el acceso a la propiedad, mediante un diseño planificado de los cambios estructurales que la economía y la sociedad requieren, por razones de eficacia económica y de sentido de justicia y equidad.

Pero todo ello supone un cambio político radical.

Que la crisis no es puramente económica, sino que expresa la incapacidad del régimen militar para resolver los problemas del país, lo atestiguan por lo demás diversos hechos. Ninguna de las soluciones parches que se intentan desde el gobierno ante el derrumbe económico ha logrado superar ni siquiera la intranquilidad de los sectores que lo han apoyado. Las tentaciones durante el año 1982 de una mayor militarización del aparato de dirección del Estado o de un viraje populista exaltando la “democracia en la base”, no ilustran sino la desorientación que reina en las altas esferas. Lo mismo se concluye del uso de recursos políti-

cos tales como la creación de una comisión para el regreso de los exiliados, que se tradujo hasta el momento en una nueva desilusión para miles de compatriotas.

Lo anterior ha alimentado la inquietud de ciertos sectores del régimen frente a lo que denominan “ausencia de normalización institucional”. Preocupados, llaman ahora a la oposición a reconocer la “legitimidad” de la Constitución de 1981, aceptando las exclusiones institucionales y los mecanismos y plazos ahí consagrados. Diversos grupos de derecha se reorganizan, y se desintegra la adhesión incondicional al régimen militar mostrada hasta ahora por parte de empresarios y gremios. Todos estos no son sino otros síntomas de la crisis política que enfrenta el modelo capitalista dominante en los últimos años.

En esta crisis las FF.AA. han quedado sin proyecto que ofrecer al país que no sea su propia perpetuación, cada vez más aisladas de quienes las apoyaron y, sobre todo, del país entero. La situación de éste se agrava cada día, y no hay ninguna solución que pueda esperarse desde el régimen militar.

Si la crisis es hoy política, la solución también debe serlo. Nadie puede ilusionarse con maniobras parciales de corto alcance. Estas sólo sirven para confundir y postergar soluciones mientras los problemas se agudizan y los chilenos ven destruirse sus condiciones de vida y su identidad como pueblo.

No hay otra solución que el término del régimen militar y el restablecimiento de la democra-

cia política. Esto ha sido comprendido así no sólo por la oposición, sino por sectores crecientes del país. Deben buscarse los medios para que se exprese el amplio consenso que sobre esto se está gestando en la sociedad chilena. Mientras antes, mejor para Chile.

UNA OPOSICION QUE SE FORTALECE

Frente a la crisis de la nación y a la crisis política del régimen, la oposición social y política ha crecido y madurado en estos años.

Su base y su eje son la vigencia de un movimiento popular, que pese a la represión, amedrentamiento y trágicas condiciones de vida, mantiene en alto su potencial libertario, sus ansias de igualdad, su lucha solidaria —en muchos ámbitos a veces modestos— por cambiar su situación y no dejarse doblegar. En el campo sindical, poblacional o estudiantil, pese a la acción del régimen en estos años, este capital popular y democrático se mantiene y desarrolla. Este es el país real; esta es la sólida base en que se asienta la oposición política al régimen militar.

En cuanto a la izquierda, ha habido un avance importante en sus planteamientos y organización.

En el último tiempo se ha perfilado con cada vez mayor claridad la necesidad de concertación y organización de la izquierda socialista. Con una larga tradición popular en el país, la convergencia de socialistas de diversas vertientes históricas y de

pensamiento, afirma la democracia política como un valor histórico irrenunciable para Chile, y plantea una opción socialista cuyos contenidos cristalizarán a través de un proceso de organización, movilización y participación popular creciente en todos los ámbitos de la vida social. Reconocemos que se trata aquí de un proceso complejo, pues implica ir mucho más allá de directivas partidarias, aunque respetando los ritmos de las organizaciones existentes.

Pero es evidente que la Convergencia Socialista, recogiendo el legado de Allende, se proyecta ya como uno de los componentes fundamentales de la futura política chilena, llamada a jugar un papel insustituible en los procesos de democratización y en la transformación del país. Respetando la diversidad de orientaciones en su seno, la heterogeneidad de su base social y la amplitud de su convocatoria, es preciso dotar a esta renovación de la izquierda socialista de formas orgánicas que aseguren a la brevedad el cumplimiento de este papel histórico.

El Partido Comunista por su parte, que representa a amplios sectores populares, es un actor indispensable en cualquier acuerdo que busque asegurar una democracia estable para Chile. Tenemos frente a este partido una concepción distinta de la práctica política, del proyecto socialista y de la política internacional. En cuanto a sus planteamientos frente a la situación chilena actual, pensamos que se reconoce ahí el legítimo derecho a rebelión de un pueblo contra una tiranía. En torno al objetivo del

término del régimen militar, obviamente es posible un amplio consenso. Sin embargo, la consecución de tal objetivo, en el discurso del P.C. va acompañado, muchas veces, de referencias ambiguas a otros contextos históricos que no son comparables con el chileno, aludiendo a un modelo de enfrentamiento militar que en Chile no es viable. Estos planteamientos —llevados o no a la práctica— limitan la capacidad real de constitución de un vasto y activo movimiento que efectivamente pueda poner término al régimen militar.

En relación a los sectores de centro, la Democracia Cristiana en los últimos años ha fortalecido su organización, y ha lanzado al debate el tema del Pacto Social para construir una democracia estable. Pensamos al respecto que no habrá salida para Chile si no hay un acuerdo entre los diversos sectores sociales y políticos para fijar un sistema mínimo de convivencia. Pero creemos también que ese acuerdo no puede ser un mecanismo para consolidar el *statu quo*, cuando después de tantos años de régimen militar se han agudizado las injurias y desigualdades sociales, deteriorando a la par las capacidades organizativas del pueblo. Por ello, junto a un acuerdo básico para fijar ese sistema de convivencia entre todos los sectores que estén por la democracia, es igualmente indispensable asegurar un bloque social y político que dentro de esas reglas garantice una progresiva transformación socio-económica y dé a la democracia un contenido progresista y popular, sin lo cual las grandes mayorías no adherirán

activamente a ella. Por lo tanto: pacto nacional para establecer la democracia y acuerdo sociopolítico mayoritario para profundizarla en el sentido de las aspiraciones populares.

La realidad del país no se agota, ni menos hoy, en la realidad de sus organizaciones políticas. Estas sin embargo muestran que hay organización, capacidad y alternativa política frente al régimen militar desde ahora.

UNA SALIDA AHORA

Todos sabemos que la crisis actual tiene solución: que un cambio de gobierno haría posible el renacimiento de la confianza interna y externa en nuestra economía y permitiría una transición rápida hacia formas civilizadas de concertación social y vida política; que existen estrategias alternativas de desarrollo más eficientes y consensuales que la fórmula neoliberal que ha arruinado al país en lo económico, lo político, lo cultural y moral; y que es posible concertar un amplio acuerdo entre fuerzas sociales mayoritarias que den apoyo consistente a una fórmula política alternativa.

El término del régimen militar y el establecimiento de un régimen democrático son la piedra angular para resolver la crisis del país.

Es en este entendido que planteamos las siguientes proposiciones:

1.- Concertación de todas las fuerzas políticas que estén por la democracia para elaborar una fórmula

consensual de término del régimen militar y establecimiento de un sistema democrático en el plazo máximo de un año.

La elaboración de esta fórmula debe acompañarse a la lucha por imponer la plena vigencia de las libertades de reunión, organización y expresión, y el desmantelamiento del aparato represivo del régimen de inmediato.

2.- Dinamización, movilización y concertación de las organizaciones sociales y populares. Se trata de vincular las luchas por las reivindicaciones sectoriales con la demanda urgente por democracia política, haciendo así de los sectores populares actores protagónicos del proceso de democratización.

3.- Exigencias a las FF.AA. por parte de estas fuerzas políticas de someterse a la voluntad ciudadana recuperando su papel profesional en la defensa nacional.

4.- Concertación por parte de todas las fuerzas políticas progresistas y populares para construir un bloque mayoritario que garantice para la futura democracia política su dinámica de cambio socio-económico, su estabilidad y profundización en todos los planos de la vida social.

democracia política son la condición insustituible para resolver la crisis nacional, pero no resuelven todos nuestros problemas. Una vez establecida esta condición quedan por enfrentar las injusticias y atropellos cometidos en estos años; la destrucción del aparato productivo; el desempleo y la recesión; el desmantelamiento del Estado y la paralización de su papel redistributivo; la ausencia de una mínima institucionalidad y de un poder judicial independiente que garantice los derechos de los chilenos; la destrucción de las formas de organización y expresión sociales; el deterioro de nuestras relaciones internacionales; etc.

El establecimiento de un régimen democrático es pues sólo un primer paso en la inmensa tarea de reconstrucción de la nación chilena.

En este vasto proceso aportaremos, dentro del marco democrático, los valores y propuestas socialistas. Ellos no se agotan en la democracia política, aunque la suponen y exigen para Chile. La lucha permanente contra las desigualdades y la explotación son el aporte insustituible que la izquierda socialista hará para profundizar la democracia política que hoy llamamos a construir.

Grupo por la Convergencia
Socialista

MAS ALLA DE LA CRISIS

El término del régimen militar y el restablecimiento de la

Santiago, enero de 1983.